

¿RÍO MÁS 20 o RÍO MENOS 20?

Dos décadas después de la gran Cumbre de la Tierra, el panorama ambiental a nuestro alrededor no luce nada bien.



El deterioro ambiental en los últimos 20 años es la prueba palpable del fracaso de las políticas internacionales. / ONU

ERNESTO GUHL NANNETTI *

Hace 20 años se celebró la denominada Cumbre de Río de Janeiro, para poner en el escenario internacional la preocupación por el deterioro del medio ambiente resultante del proceso de desarrollo. La reunión estuvo inspirada en el muy razonable principio de situar el medio ambiente como el valor dominante, y a partir de allí buscar formas de desarrollo que permitieran la mejora de las condiciones de vida de la población y garantizar la sostenibilidad del progreso humano. Se propuso una generosa hermandad internacional para salvar el planeta y se preparó una hoja de ruta hacia la sostenibilidad, que se denominó la Agenda XXI.

Los logros de esta ambiciosa y renovadora iniciativa han sido muy modestos y la salud del planeta sigue deteriorándose. El Pnuma prepara periódicamente un informe, el GEO, para evaluar el estado del ambiente en las diversas regiones del mundo. El último de ellos concluye que hemos cruzado "umbrales críticos" que amenazan gravemente el bienestar humano.

En síntesis, se puede afirmar que los ideales y metas acordadas en Río 92, no se han cumplido en lo fundamental y que el estado del

planeta sigue un peligroso curso de deterioro impulsado por un modelo económico globalizado e insostenible.

¿Por qué ha sucedido esto? ¿Por qué seguimos destruyendo nuestra propia casa? Si bien es cierto que las respuestas a estas preguntas son múltiples e interrelacionadas, podrían resumirse en dos: la ineficacia de los acuerdos multilaterales y la falta de participación ciudadana en ellos.

En cuanto a la primera, si bien es cierto que muchos de los fenómenos de deterioro ambiental tienen expresiones globales, su tratamiento debe hacerse a nivel local, resolviendo problemas concretos en contextos muy diversos y diferentes. Es muy difícil llegar a acuerdos prácticos que aborden realidades, intereses y situaciones tan diferentes como las de Dinamarca y Colombia. El mejor ejemplo de estos acuerdos globales es la frustrante historia del Protocolo de Kioto, que no ha permitido reducir, ni siquiera mitigar, las emisiones de gases de efecto invernadero.

Sobre la falta de participación pública, vale la pena recordar que la gestión ambiental debe ser un proceso compartido e integrado. Sus principales actores, el Estado, la sociedad civil y el sector privado, deben acordar objetivos co-

munes en materia de conservación y manejo del medio ambiente. Pero la sociedad civil ha tenido muy poco que decir en el diseño y la práctica de la gestión ambiental. Los mecanismos de participación pública son escasos y formales. Por ello los afectados por los proyectos de desarrollo han recurrido a la protesta y a las instancias judiciales para hacer valer sus derechos e intereses en relación con el medio ambiente.

Si comparamos los marcos conceptuales e ideológicos de las cumbres de Río 92 y de Río+20, la diferencia principal estriba en que la posición dominante de los temas ambientales y su carácter público sobre los temas económicos, que inspiró a la primera, ha sido sustituida por la preponderancia de los temas económicos sobre los

ambientales en la segunda.

Presenciamos una especie de privatización del medio ambiente y sus servicios, al dejar de considerarlos como externalidades gratuitas e ilimitadas y darles valor económico para crear con ellos nuevos y prometedores mercados.

Este cambio de paradigma plantea la búsqueda de la sostenibilidad por la vía de la actividad económica liderada por empresas de gran tamaño, tratando de ajustar el insostenible modelo económico vigente. Este nuevo camino se ha denominado la 'economía verde'.

De acuerdo con el Pnuma, esta vía debe "mejorar el bienestar del ser humano y la equidad social, a la vez que reduce significativamente los riesgos ambientales y las escaseces ecológicas". Sin embargo, la economía verde es aún un concepto en construcción y existen serios temores de que con él se afiancen las fuerzas extractivistas que impulsan la privatización de los bosques y la biodiversidad, del agua, de los alimentos y de la energía, en detrimento de los derechos económicos, culturales y políticos.

La economía verde estará en el centro de la discusión en Río+20. Si se adopta como orientación y guía para las políticas ambientales nacionales, su éxito en la búsqueda de la sostenibilidad depen-

derá de que su concepción y ejecución se basen en el conocimiento y en la participación efectiva de todos los grupos de interés, en el ejercicio justo y cualificado de la autoridad ambiental por parte del Estado y de cuán precisos y adecuados sean los recursos y medios para su implantación.

La propuesta colombiana para Río+20, formulada de manera muy cerrada y poco participativa en la Cancillería, propone la adopción de un nuevo conjunto de indicadores, esta vez sobre desarrollo sostenible. Es muy posible que tenga una buena acogida en la cumbre pues reúne las condiciones para ello; es una iniciativa cómoda para una reunión multilateral de gobiernos, ya que suena bien, es inteligente y creativa, pero muy poco precisa y no compromete a nadie.

Para que su propuesta sea creíble, el gobierno nacional deberá superar la dicotomía entre el discurso y la práctica. Su política ambiental y su ejecución, casi a la mitad del período, se apoya todavía en una institucionalidad débil y en transformación, que dispone de recursos muy limitados para atender el nuevo escenario. En él las "locomotoras", sobre todo las más riesgosas, la minera y la petrolera, corren sin rieles sobre el territorio nacional. ▀

* Director Instituto Quinaxi

» Los ideales y metas acordadas en Río 92, no se han cumplido en lo fundamental y el estado del planeta sigue un peligroso curso de deterioro.